



*Comisión
Extraordinaria Nacional por la Transparencia
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*



Guatemala, 12 de Septiembre del 2016.
Oficio No. 194-2016/cs

00000032

**Licenciada
Ana Isabel Antillón
Directora Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho.**

Respetable Licenciada Antillón:

De manera atenta me dirijo a su persona deseándole éxitos en sus actividades diarias, aprovechando la oportunidad para trasladar a usted el original del Dictamen 5-2016 emitido por la Comisión Nacional por la Transparencia sobre la iniciativa número 4936, misma que dispone aprobar la "Ley Para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger sus Identidades", el cual después de realizar un análisis exhaustivo con la correspondiente técnica jurídica y legislativa correspondiente, esta Comisión ha emitido **DICTAMEN FAVORABLE** con enmiendas, para el proyecto en mención, por lo tanto me permito adjuntar a la presente el proyecto de decreto así como el dictamen de mérito para su trámite correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Deferentemente,


Diputado Julio César Ixcamey Velásquez

Presidente de la Comisión Nacional por la Transparencia





00000033

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

DICTAMEN 5 – 2016

INICIATIVA 4936

**INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA FACILITAR E
INCENTIVAS LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCION Y PROTEGER
SUS IDENTIDADES**

HONORABLE PLENO:

I. ANTECEDENTES.

El cinco de Febrero del año dos mil dieciséis conoció el Pleno del Congreso de la República la iniciativa número **4936** que dispone aprobar la *Ley Para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger sus Identidades*; misma que fue remitida y recibida el once de Febrero del año en curso en la Comisión Extraordinaria Nacional Por la Transparencia para su estudio, análisis y procedente dictamen, la iniciativa fue presentada por los Diputados José Roberto Alejos Cámara, Felipe Alejos Lorenzana, Roberto Kestler, Ronald Arango, Ovidio Monzón, Paul Briere y Nineth Montenegro.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

A. DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS.

Los Diputados ponentes exponen que las prácticas deshonestas y corruptas realizadas en el ejercicio de la función pública por parte de los funcionarios públicos, se han generalizado en el país sin que hasta el momento exista el incentivo necesario para facilitar la denuncia en virtud de la existencia de posibles represalias.



00000034

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

En ese sentido, los Diputados ponentes exponen que Guatemala suscribió en 1996 la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en el seno de la Organización de Estados Americanos y la misma fue ratificada por

Guatemala en el 200. En dicha Convención se evoca la disposición de los Estados signatarios de fomentar los mecanismos de participación de los funcionarios o empleados públicos en la denuncia de actos de corrupción, de manera que se conserve un mecanismo de protección de las personas que, al tener conocimiento de un acto corrupto, puedan denunciarlo sin temor a que sean destituidos o se puedan tomar represalias en su contra.

Asimismo los Diputados ponentes exponen que la legislación nacional no cuenta con disposiciones para la protección de los denunciantes que no intervengan en el proceso penal y por lo mismo no se protege a los servidores públicos cuando denuncian los actos impropios o bien actos corruptos. De tal suerte, que al existir una ley modelo propuesta por la Organización de Estados Americanos –OEA– se toma como base para el desarrollo de la normativa legal propuesta en la presente iniciativa, esta ley modelo con la aplicación práctica y jurídica de la realidad guatemalteca.

Por ultimo en la exposición de motivos, los Diputados ponentes, hacen una reseña de la iniciativa indicando que la misma se compone de dos aspectos importantes relacionados con la protección que se le dará a los denunciantes, siendo estas las medidas básicas y las adicionales, así como las instituciones encargadas de llevar a cabo el procedimiento de protección así como la continuación de las denuncias. Se expone la necesidad de que esta iniciativa de ley prosiga su trámite dado que existe un vacío legal en este aspecto que muy bien podría llenarse y de esta manera atacar la corrupción existente en la función pública.

B. DEL CONTENIDO PROPIO DE LA INICIATIVA:

La iniciativa de ley 4936 que dispone aprobar la Ley para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger sus Identidades, establece un articulado que sigue la Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger sus Identidades, texto este propuesto por la Oficina de Cooperación Jurídica de la Organización de Estados Americanos y que recoge en gran parte las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción instrumento de derecho



00000035

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

convencional este ya suscrito y ratificado por Guatemala en el año 2001. Siguiendo tal estructura legal, la iniciativa se compone de nueve Capítulos los cuales recogen las disposiciones ya indicadas.

La iniciativa establece que el objeto de la ley es la de formular normas, procedimientos y mecanismos para que se facilite e incentive la denuncia de actos de corrupción susceptibles de ser investigados y sancionados penal y administrativamente. En ese orden de ideas, en el artículo 2 de la iniciativa, existe una serie de definiciones tendientes a dar certeza jurídica a los conceptos que se vierten en la misma ley y para consideración de la aplicación de la misma, estas definiciones en su mayoría son recogidas de la Ley Modelo ya indicada en el párrafo anterior.

La iniciativa como tal no cuenta con epígrafe relacionado al Capítulo I y su título, por lo que del artículo 1 al 6 se expone el objeto, definiciones, compromisos de difusión y la rendición de cuentas sin embargo no se anota el capítulo y su título. A este respecto, al considerar que esta iniciativa recoge lo establecido en la Ley Modelo ya referenciada en este apartado, y dicho epígrafe sería "Capítulo I. Consideraciones Generales", que se considera que sería este epígrafe. Asimismo el Capítulo II, establece la regulación legal relacionada con la facilitación e incentivos para la denuncia de los actos de corrupción. En este aspecto los artículos del 7 al 15, regulan la forma en que deba de presentarse la denuncia asimismo establece la obligación de denunciar o hacer de conocimiento de las autoridades competentes, que se establece en la misma ley. A este respecto se recoge en el artículo 10 de la iniciativa, la denuncia anónima, la cual se permite por razones de seguridad y la autoridad encargada de la misma deberá de valorar la veracidad e incidencia de la iniciativa para poder proseguir con la investigación. Asimismo se establece una regulación especial en relación a las denuncias falsas o de mala fe, estableciendo una multa por tal acción.

El Capítulo III, se dedica a la Protección a denunciantes de actos de corrupción, en ese sentido la iniciativa establece una serie de garantías provistas para el denunciante, por el simple hecho de serlo, además de la garantía establecida como medidas adicionales que se pueden disponer para proteger la estabilidad laboral o la protección personal del denunciante.



00000036

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

Asimismo el Capítulo IV, dispone la protección a los testigos de actos de corrupción, incluyendo entre estas una serie de medidas básicas de protección para los testigos y también, al igual que los denunciantes, una serie de medidas adicionales de ser necesaria. A este respecto se advierte que la regulación establecida para testigos y para denunciantes provee una serie de garantías idénticas en lo que corresponde a la protección laboral, aunque difieren de las medidas de protección personal por la información que un testigo tenga la cual en muchos de los casos contribuye a ahondar en las investigaciones.

En cuanto al Capítulo V, que contiene el articulado del 23 al 38 regula lo relativo a las solicitudes y concesiones de medidas de protección y el procedimiento que se debe de instituir sobre este aspecto. Así el Capítulo VI, establece una serie de medios de impugnación que pueden incoarse en caso de denegatoria de medias. En ese aspecto debe advertirse que si bien, la regulación de los medios de impugnación son parte del procedimiento válido en los ámbitos del derecho procesal, debe considerarse que en estos casos, no puede seguirse dicha regla, ya que en el artículo 39, establece la posibilidad de la denegatoria de otorgar medidas de protección y la interposición de recursos legales y el artículo 40 señala la vía de lo contencioso administrativo para ello, lo cual demerita en gran manera el incentivo de presentar denuncias.

Por último los capítulos VII, VIII y IX de la iniciativa plantean aspectos relacionados con la responsabilidad por incumplimiento de funciones, mecanismos de cooperación internacional y la creación de un programa de protección de denunciantes de actos de corrupción con lo cual finaliza la iniciativa.

Esta Comisión hace hincapié en realizar un análisis jurídico legal de esta iniciativa con base a las consideraciones constitucionales y legales que se tengan a bien citar en el presente dictamen. En general, la iniciativa pretende crear una regulación legal que permita a los laborantes en la administración pública o bien funcionarios de la misma, la denuncia de actos de corrupción, sin que por ello se queden en posición vulnerable y de igual manera puedan contribuir a la erradicación de la corrupción en Guatemala.

III. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES.



00000037

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 1 que el *"Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común"*. De esta manera, en la búsqueda de ese fin supremo, es decir de la realización del bien común. Es responsabilidad del Estado, promover todos los instrumentos legales necesarios para que los guatemaltecos puedan desarrollarse y protegerse sin verse en la obligación de consentir actos de corrupción por encontrarse en una situación vulnerable. De allí que el Estado organizado de tal manera que proteja a la persona, puede lograr la erradicación de los actos de corrupción mediante la protección jurídica a los denunciantes o testigos de los mismos.

Así en el artículo 2, la Constitución Política de la República regula los deberes del Estado para garantizar a todos los habitantes todos aquellos valores que son inherentes y necesarios para el desarrollo integral de manea que establece *"Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona"*, así el Estado tiene como deber el garantizar la libertad, justicia y seguridad de las personas, ello implica que disponga de un asidero legal suficientemente claro y definido que le permita a las personas la protección debida para que en libertad puedan denunciar aquellos actos corruptos que se cometen en la administración pública.

Establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala el derecho de defensa, al preceptuar *"Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente."* Asimismo el artículo 14 del texto constitucional establece la presunción de inocencia, al indicar: *"Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata"*. Bajo la premisa de los artículos constitucionales anteriormente expuestos, se comprende que son derechos inherentes a la persona humana y garantías constitucionales los derechos de Defensa y Presunción de



00000038

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

Inocencias, combinado con el derecho al debido proceso, es decir que estas garantías prevalecen en todo proceso penal. En la iniciativa de ley, se contemplan las disposiciones inherentes al derecho de defensa, debido proceso y presunción de inocencia, establecidos dado que las denuncias presentadas en sí mismas no constituyen sino los medios primarios de una investigación de actos de corrupción y por lo mismo no se observa en modo alguno que exista violación a estas garantías constitucionales.

De igual manera la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 203 establece que *"Corresponde a los Tribunales de Justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado"* por lo que es parte de la facultad del Estado a través del Organismo Judicial, la potestad de juzgar en ese sentido promover la actividad del órgano jurisdiccional a través de los diversos tribunales y aplicar las penas correspondientes. En ese sentido no se advierte que la iniciativa de por sí establezca una facultad diferente a la que constitucionalmente se dispone de que la facultad de juzgar corresponden al Organismo Judicial a través de los Tribunales de justicia.

Establece el artículo 154 y 155 de la Constitución Política de la República,

"Artículo 154. Función Pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causare. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleado públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción". Bajo esta premisa se establece que los funcionarios y empleados públicos, se encuentran sujetos al Estado y el ejercicio de sus cargos debe ser transparente, ya que la violación de ley no queda impune, es decir que siempre va acompañado de sanciones legales las cuales deben imponerse.

Establece asimismo el artículo 156 de la Constitución Política de la República que *"ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está*



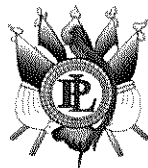
00000039

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito". En ese orden de ideas, resulta evidente que los funcionarios o empleados públicos, no cuentan con un asidero legal que les provea protección jurídica ante las ordenes abiertamente ilegales que reciban o bien que impliquen la comisión de un delito, dado que existe la obligación de denuncia, pero la misma no se incentiva si no se cuenta con una protección jurídica que coadyuve a la presentación de denuncias, sin correr el riesgo de represalias.

Asimismo establece el artículo 457 del Código Penal el delito de Omisión de Denuncia, el cual establece: *"El funcionario o empleado público que, por razón de su cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y, a sabiendas, omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales. En igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado, dejare de denunciar".* En este caso, la iniciativa de ley propuesta, llena un vacío legal respecto a la protección jurídica del funcionario o empleado público denunciante, así como de los posibles testigos puesto que estos, al no tener ninguna protección jurídica para hacer valer las denuncias, no se sienten incentivados a realizarla por lo que incurrir en el delito de omisión de denuncia tal y como lo establece el Código Penal.

Guatemala, mediante Decreto 15-2001 del Congreso de la República, ratificó la Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela el 29 de Marzo de 1996. Llegando la misma a ser ley en el país, convención esta que promueve la facilitación y cooperación internacional para que los actos de corrupción puedan ser denunciados y perseguidos. En ese orden de ideas se establece que la Convención suscrita y ratificada desde el 2001, debía de implementarse en los países signantes mediante la promulgación de una normativa legal, mismas que hasta la fecha no se ha conocido en el Honorable Congreso de la República, sin embargo es a través de esta iniciativa de ley 4936, la que dispone este marco legal. Siendo que el mismo fue elaborado con base a la ley marco propuesta por la Organización de Estados Americanos, en el marco de la citada convención es necesaria su revisión, aunque se advierte la necesidad de la existencia de esta normativa legal.



00000040

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISION.

Esta Comisión considera conveniente resaltar que la iniciativa de ley 4936 que dispone aprobar la Ley para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger sus Identidades, fue presentada por los Diputados Ponentes, Roberto Alejos, Felipe Alejos, Roberto Kestler, Ronald Arango, Ovidio Monzón, Paul Briere y Nineth Montenegro, en arreglo y tomando como base la Ley Modelo, dispuesta por la Convención Interamericana Contra la Corrupción. En ese orden de ideas, se considera que si bien es cierto esta ley modelo recoge los aspectos fundamentales contenidos en la Convención mencionada, la misma debe ser objeto de un análisis exhaustivo para que pueda ser viable su implementación y su contenido constitucionalmente adecuado a efecto de que la mismas pueda ser incluida en el sistema jurídico guatemalteco y pueda aplicarse. En ese orden de ideas, habrá que determinar que su contenido sea constitucionalmente adecuado en primer término, es decir que las disposiciones contenidas en la iniciativa de ley, no viole ningún precepto constitucional para que la misma no adolezca de inconstitucionalidades que hagan imposible su aplicación.

Esta Comisión estima conveniente advertir que la iniciativa de ley, busca llenar un vacío legal existente en la legislación guatemalteca, especialmente en lo relativo a la protección jurídica de las personas, funcionarios o empleados públicos, que al tener conocimiento o noticia de un acto de corrupción, pueda proceder a denunciarlo como corresponde, sin que esta actitud pueda ser objeto de vejámenes o bien de represalias de parte de funcionario o empleado corrupto dado la relación existente entre la jerarquía laboral en algunos casos.

En connivencia con lo expuesto anteriormente esta Comisión, al analizar el articulado de la presente iniciativa hace las siguientes observaciones que deberán de considerarse:

A. La Comisión considera necesaria, por seguridad jurídica y técnica legislativa, que en el literal b, del artículo 2 se establezca que es lo que se enciende por actos de corrupción de acuerdo a lo que establece los artículos

VI, VII, IX y XI de la Convención Interamericana contra la Corrupción, dado que no es correcta la técnica legislativa que remita a otro cuerpo legal, lo que precisamente está regulando. En ese sentido, se entiende de que al regular la denuncia de actos de corrupción este debe de estar expresos en



00000041

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

la ley, para que la misma pueda ser aplicada. Igual suerte deberían de correr los aspectos regulados en el Código Penal, aunque por ser este un cuerpo normativo de carácter interno y nacional, bastaría con remitir a los artículos o títulos que regulen el mismo. De esta cuenta, se considera necesaria que dichos artículos sean modificados para que la iniciativa de ley tenga una mayor perfectibilidad, entendiendo que toda normativa es perfectible, puesto que regula la conducta humana principalmente. En ese mismo sentido se manifiesta la Comisión al advertir que las definiciones necesitan redefinirse, en ese aspecto debe de concebirse que una Ley Marco, no es una ley específica y las definiciones pueden variar de un país a otro, por tal razón se considera necesaria hacer algunas modificaciones a las definiciones para que las mismas sean adecuadas en connivencia con la realidad guatemalteca.

B. Le parece interesante a esta Comisión, las regulaciones de las competencias de orden Administrativo y Judicial, se designen a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público respectivamente, lo cual es comprensible dado que tanto en la Convención Interamericana contra la Corrupción como en la Ley Marco indicada, sin embargo considera que el acompañamiento del Procurador de Los Derechos Humanos, tanto en las denuncias de tipo administrativo como las de índole penal, es necesario para que exista un verdadero seguimiento de tales denuncias. Puesto que el funcionario o empleado público denunciante, necesita tener la protección inmediata de parte del ente encargado de velar por esta protección misma que no debería retrasarse.

C. Esta Comisión asimismo expone que existe una necesidad real de que en la iniciativa de ley, se establezca la obligación del Procurador de Los Derechos Humanos de estar presente en todo el procedimiento de las denuncias realizadas por los funcionarios y empleados públicos ya que de otra manera los se corre el riesgo de que no se le de seguimiento a la denuncia o habiéndosele dado no se otorgue la protección jurídica al denunciante o al testigo lo cual va en detrimento del funcionamiento de la ley, razón por la cual deberá de comprenderse que la iniciativa debe contener esta enmienda.

D. En la iniciativa de ley, se dispone un capítulo dedicado a los medios de impugnación, en los cuales se pueden impugnar las decisiones de autoridades competentes, sin embargo estos medios de impugnación establecidos en dicho capítulo hacen ineficaz toda la ley, debido a que si la autoridad deniega las solicitudes de protección esto desincentiva a los



00000042

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

funcionarios o empleados públicos las denuncias de actos de corrupción debido a que si no se otorgan las medidas entonces esto pondría en riesgo al funcionario o empleado público que interpone la denuncia. Al analizar la vía administrativa, esta sería muy larga, como ya se sabe para que exista una resolución y ello no contribuye a la eficacia de la ley. En todo caso, se considera necesario verificar o modificar los artículos del 39 al 41, en virtud de que para el Ministerio Público no es procedente el recurso de queja y en el caso de la Contraloría de Cuentas, siendo este el ente de conocimiento administrativo, no es procedente llevar a cabo todo un procedimiento administrativo para el establecimiento de medidas.

E. Esta Comisión al analizar el Capítulo VIII de la iniciativa considera que los mismos no son necesarios para el funcionamiento de la ley una vez sea aprobada, en realidad se establece que el Capítulo VIII, trata sobre mecanismos de Cooperación Internacional, lo cual ya se encuentra dispuesto en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita y ratificada por Guatemala, lo cual hace inoperante que exista en una ley cuyo objeto sea la facilitación e incentivación de las denuncias contra la corrupción.

Respecto al Capítulo XI, el mismo establece la necesidad de la creación de un programa de protección de testigos y denunciantes; sin embargo mediante el Decreto 70-96 del Congreso de la República se promulgó la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal. Bajo este rubro se entiende que ya existe un sistema de protección para sujetos procesales y en este caso incluirá a testigos y los mismos denunciantes que a la vez funcionarían como tales, en este sentido, la autoridad administrativa en realidad no necesitaría crear un programa de protección de denunciantes y testigos, puesto que al investigar los hechos administrativos y la comisión de estos actos que puedan dar lugar a investigaciones de tipo penal, lo que caería bajo la función del Ministerio Público.

En el sentido indicado se considera que no son necesarias estas regulaciones establecidas en los Capítulos VIII y IX, ya que las mismas aunque aparecen en la Ley Modelo provista para aplicar la Convención Interamericana contra la Corrupción, las mismas ya no responden a las necesidades de la realidad material de Guatemala. Como se sabe Guatemala ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción misma que fue refrendado por el Honorable Congreso de la República, por lo que al ser formar parte del ordenamiento jurídico guatemalteco, de conformidad con



00000043

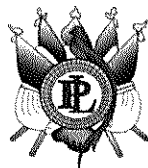
Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

el Derecho Internacional fundados en el principio de *pacta sunt servanda*, El Estado de Guatemala está obligado a cumplir con las disposiciones que contrajo en la Convención suscrita bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos, por lo que resulta innecesario incluir en la iniciativa de ley los capítulos VIII y IX, mismos que son parte del derecho convencional internacional y por lo mismo, aunque se encuentren en la Ley Modelo producto de la Convención no por ello es necesaria su inclusión, siendo que en la ley modelo se incluyen estos apartados por la previsión de que algún Estado adoptando esta ley modelo no haya suscrito la Convención. ,

DICTAMEN

La Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, al haber realizado un estudio sobre la iniciativa propuesta con la adecuada técnica jurídica, con base en lo que expuesto anteriormente, así como las consideraciones constitucionales, legales y doctrinales vertidas y sobre lo que para el efecto establecen los artículos 34, 40, 41, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo Decreto 63-94 del Congreso de la República. En consideración a lo indicado, la Comisión Extraordinaria Nacional Por la Trasporencia emite **DICTAMEN FAVORABLE** con enmiendas, a la iniciativa de mérito por considerarlo viable, oportuno, conveniente, constitucional y se eleva a consideración del Honorable Congreso de la República para el trámite correspondiente.


EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA BANCADA UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.



000000044

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia


Diputado Julio César Ixcamey Velásquez
~~Presidente~~


Juan Carlos Salanic García
Vicepresidente


Lucrecia Carola Samayoa Reyes
Secretaria


Edwin Noé Maldonado Lux


Marleni Ligeth Matias Santiago


Mauro Guzmán Mérida


Hector Melvyn Caná Rivera


Oscar Arturo Argueta Mayén


Carlos Alberto Barreda Taracena



00000045

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

DECRETO No. -2015

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que el fin supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común, que el Estado Guatemalteco se ha comprometido a nivel nacional e internacional a luchar en contra de la corrupción, que el poder proviene del pueblo y que los funcionarios son depositarios de la ley y jamás superiores a ella;

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala ha aprobado y tomado como propia, la Convención Interamericana contra la Corrupción como parte de su lucha en contra de ese flagelo que a la vez que limita la posibilidad de cumplir con los altos fines del Estado, erosiona su legitimidad ante el pueblo; y que la OEA integró un grupo de juristas para que desarrollaran normativa que sirva de modelo a los países integrantes del foro, con el fin de llevar a la práctica los postulados de dicha convención;

CONSIDERANDO

Que la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, necesita para su efectividad contar con instrumentos legales que determinen los procedimientos, las responsabilidades institucionales y los mecanismos de protección para las personas que constituyen testigos de actos de corrupción a quienes es necesario garantizar el irrestricto goce de sus derechos y la protección en caso ser sujetos de represalias por parte de los responsables de los actos de corrupción.

CONSIDERANDO

Que la sociedad Guatemalteca se encuentra en la necesidad de denunciar, combatir y erradicar la corrupción en cualquier nivel de la administración gubernamental y que el avance en materia de transparencia y anticorrupción aunado al esfuerzo de protección a denunciantes y testigos coadyuvará a erradicar estos actos ilícitos;

POR TANTO

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,



00000046

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

DECRETA:

LA SIGUIENTE;

DECRETO NÚMERO -2015

**LEY PARA FACILITAR E INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE
CORRUPCIÓN Y PROTEGER SUS IDENTIDADES**

Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer normas, procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados administrativa o penalmente; y establecer los mecanismos y medidas idóneas para proteger al funcionario público o a cualquier persona que, de buena fe, denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos.

Artículo 2º.- Definiciones. Para la debida aplicación e interpretación de las disposiciones establecidas en la presente ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

a. Funcionario Público.- Cualquier funcionario o empleado del Estado investido de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, que ejerzan dicha función en cualquiera de las entidades de la administración pública, sus organismos, proyectos, fondos, programas o empresas del Estado, cuyas actividades se realicen en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideren sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen. Se incluyen los funcionarios que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos con independencia de su modalidad de contratación.

b. Actos de Corrupción.- Se entiende por actos de corrupción los ilícitos descritos en los artículos VI, VII, IX y XI de la Convención Interamericana contra la Corrupción y los contemplados en el Código Penal Decreto 17-73

y distintas normas especiales de carácter penal y administrativo.

Asimismo, deben considerarse las faltas o ilícitos de carácter administrativo contempladas en la legislación especial sobre la materia, que también quedan sujetos a las disposiciones de esta norma.

c. Autoridad Competente.- Es la institución responsable de recibir, calificar y otorgar medidas de protección. Puede ser jurisdiccional o administrativa según sea la naturaleza del acto de corrupción.

d. Denunciante de Buena Fe.- Toda persona que hace del conocimiento de la autoridad competente un hecho que considera que puede constituir un



00000047

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

acto de corrupción susceptible de ser investigado en administrativa y/o penalmente.

e. Testigo de Buena Fe.- Toda persona que posee información relevante sobre actos de corrupción en materia administrativa y/o penal y que se encuentra dispuesta a colaborar con los fines persecutorios de la justicia.

f. Denuncia o testimonio de mala fe.- Acto de hacer del conocimiento de la Autoridad Competente información sobre un acto de corrupción, a sabiendas que los actos denunciados no se han cometido, o con simulación de pruebas o indicios de su comisión con el fin de iniciar un proceso de investigación administrativa y/o penal.

g. Persona protegida.- Denunciante o testigo de un acto de corrupción al que se le ha concedido medidas de protección con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos personales y laborales, así como el diligenciamiento administrativo o judicial de los actos de corrupción.

h. Medidas de Protección.- Conjunto de medidas dispuestas por la autoridad competente orientadas a proteger el ejercicio de los derechos personales y laborales de los denunciantes y testigos de actos de corrupción, así como la familia del denunciante o testigo, dentro de los grados de ley. Las medidas de protección también tienen como objetivo asegurar el adecuado diligenciamiento administrativo o judicial de los actos de corrupción. Su aplicación dependerá de las circunstancias y condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la Autoridad Competente y, de ser el caso, se hará extensible a su cónyuge o conviviente, ascendientes, descendientes y hermanos.

Artículo 3.- Competencias. Cuando la denuncia esté relacionada con hechos de *naturaleza administrativa* la Autoridad Competente para recibir las solicitudes de protección, calificar su contenido y/o otorgar las medidas necesarias es la Contraloría General de Cuentas.

Quando la denuncia esté relacionada con hechos de *naturaleza penal* la autoridad Competente para recibir las solicitudes de protección, calificar su contenido y/o otorgar las medidas necesarias es el Ministerio Público.

Para la ejecución de las medidas de protección y dependiendo de la naturaleza y del alcance de las medidas de protección, se podrá pedir la asistencia y cooperación de cualquier otra entidad pública.

Artículo 4.- Excepciones de aplicación de la Ley. No podrán acogerse a ninguna medida de protección:

1. Los que formulen denuncias o proporcionen información de mala fe conforme al artículo 14 de la presente ley.



00000048

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

2. Los que proporcionen información obtenida lesionando derechos fundamentales.
3. Las personas que hayan sido expulsadas del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción.

Artículo 5.- Compromiso de difusión. Todas las entidades públicas deben establecer los procedimientos necesarios para difundir entre sus empleados y la ciudadanía los alcances de esta Ley, publicando su texto, cuando menos en los lugares de mayor visibilidad y en los formatos y/o portales electrónicos cuando cuenten con este medio.

Sin perjuicio de ello se podrán implementar otro tipo de mecanismos que garanticen el conocimiento de la presente norma.

Artículo 6.- Transparencia, rendición de cuentas y confidencialidad. Toda la información presentada por el denunciante y/o testigo, su identidad, y todas las actuaciones relacionadas no podrán ser de conocimiento público a través de una solicitud de acceso a la información, teniendo el carácter de confidencial.

No podrá darse información ni entregarse ningún documento, salvo por orden de la autoridad competente, o en caso extraordinario por solicitud de un tribunal. No obstante lo anterior, el programa podrá ser auditado respecto a los procedimientos de operación pero en ningún caso los auditores podrán conocer los nombres o las ubicaciones de los testigos que hubiesen cambiado de nombre o fueren relocalizados.

Los auditores deberán de firmar un compromiso de confidencialidad, por lo que en ningún momento podrán difundir por cualquier medio, información relativa a los programas de protección de denunciantes y testigos.

La autoridad competente presentará un informe anual al Congreso de la República sobre las condiciones y operación de este programa sin que se puedan conocer o difundir los nombres o las ubicaciones de los testigos que hubiesen cambiado de nombre o fueren relocalizados.

CAPITULO II

FACILITACIÓN E INCENTIVOS PARA LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN

Artículo 7.- Denuncia de Actos de Corrupción. La denuncia de actos de corrupción es la acción libre y voluntaria de hacer del conocimiento de las autoridades competentes un acto de corrupción para su posterior calificación, investigación y sanción. Puede o no estar acompañada de una solicitud expresa de medidas de protección.



00000049

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

Su sola interposición cuenta con garantías y medidas de protección básicas conforme a lo estipulado en la presente ley.

Artículo 8.- Obligación de denunciar. Toda persona que tuviese conocimiento de un acto de corrupción tiene la obligación de hacer del conocimiento de las autoridades competentes los hechos, para su posterior investigación y sanción, sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de trabajo.

En el caso de los funcionarios públicos la obligación de denunciar los actos de corrupción, así como los procedimientos y las medidas de protección que garanticen la denuncia, se le informarán desde el inicio de su relación laboral con la entidad pública.

Las autoridades tienen el deber de facilitar a los empleados públicos y particulares el cumplimiento de la obligación de denunciar actos de corrupción.

Artículo 9.- Medidas administrativas para facilitar el acto de denuncia de un acto de corrupción.

La autoridad competente para recibir las denuncias de actos de corrupción, deberá realizar cambios organizacionales y funcionales que aseguren su atención oportuna y la confidencialidad del acto, en caso que sea necesario.

Estos deberán tener como contenido mínimo, medidas como;

1. Designación de funcionarios especializados para la atención de denuncias de actos de corrupción.
2. Procedimientos de trámite documentaría diferentes a los ordinarios.
3. Facilitación de un formato conforme al modelo anexo a la presente ley.
4. Asignación de número telefónico específico para la atención de denuncias de actos de corrupción.
5. Creación de cuenta de correo electrónico específica para la atención de denuncias de corrupción.
6. Presentación de la denuncia por interpósita persona sin revelar la identidad del denunciante.

Estas medidas también son aplicables para la presentación de solicitudes de medidas de protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción.

Artículo 10.- Denuncia anónima. Si por razones de seguridad el denunciante y/o testigo se rehúsa a identificarse la autoridad valorará la información



00000050

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

recibida y en uso de sus competencias, determinará el inicio de las investigaciones pertinentes.

Es obligación de la autoridad competente posteriormente a la calificación de la información obtenida por medio de la denuncia, iniciar la investigación respectiva producto de los hechos denunciados.

Artículo 11.- Reserva de la identidad del denunciante. De todas las denuncias independientemente del medio de su presentación, se dejará constancia escrita, para lo cual se les asignará un código numérico especial que servirá para identificar al denunciante, no pudiendo en ningún caso hacerse referencia directa a su identidad en cualquier diligencia posterior tanto en sede administrativa y/o judicial.

Asimismo, deberá mantenerse un registro con los nombres y fechas de todas las personas que hubieran tomado conocimiento del expediente de denuncia quedando impedidas de dar a conocer esa información de un modo que, revele su identidad, o la de cualquier persona vinculada con él.

El incumplimiento de esta disposición acarrea las responsabilidades administrativas civiles y penales a que hubiese lugar señaladas en el Capítulo VII de esta ley.

Artículo 12.- Denuncia de hostilidad o represalias laborales. Las entidades receptoras de las denuncias también son competentes para recibir denuncias de actos de hostilidad, como por ejemplo, despido arbitrario, disminución de salario, movilización intempestiva de centro de trabajo, cambios injustificados de la naturaleza del trabajo, u otros que denoten una modificación de las relaciones laborales y de subordinación no justificables.

Recibidas estas denuncias se coordinará con la autoridad administrativa supervisora de los derechos laborales para que se constate lo denunciado en forma sumaria. De comprobarse que existe relación entre el testimonio y los actos de hostilidad, y que con estos se tenga la intención de amedrentar o castigar a los denunciantes y testigos, se pondrán en consideración de la autoridad penal y/o administrativa para que se emitan las medidas cautelares respectivas y se sancione a los responsables. Cuando se demuestre que el acto hostil es responsabilidad del superior del denunciante y/o testigo se considerará como una circunstancia agravante.

Artículo 13.- Denuncia al superior. En ningún caso, el acto de denunciar de buena fe actos de corrupción al superior, podrá ser interpretado como incumplimiento de obligaciones contractuales, falta de lealtad con la autoridad, o con la institución que puedan dar lugar a medidas sancionatorias.



00000051

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

La aplicación de medidas sancionatorias en represalia a la formulación de una denuncia de buena fe, será considerada como hostilidad, sujeta a responsabilidad de la autoridad superior conforme a lo señalado en el Capítulo VII de esta ley.

Artículo 14.- Denuncia de mala fe. Los denunciantes y testigos que a sabiendas que los actos denunciados no han sido cometidos, o que simulen pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa y/o penal, o preste testimonios contra terceros será multado con hasta veinte (20) veces el monto de referencia mínimo salarial, sin perjuicio de las responsabilidades de civiles y penales a que hubiese lugar.

Artículo 15.- Beneficios para el denunciante y/o testigo de actos de corrupción. Las autoridades competentes podrán otorgar beneficios económicos a favor de los denunciantes y testigos de actos de corrupción cuando como producto de la información proporcionada se haya permitido la imposición de sanciones de reparación pecuniarias, o se haya aportado información veraz y útil que coadyuve a la identificación y localización de recursos, derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones relacionadas con actos de corrupción.

El monto de la recompensa, corresponderá hasta el equivalente del cinco por ciento (5%) del valor de lo recuperado o resarcido, conforme a la tasación realizada por peritos, y a la decisión de las autoridades competentes que valorarán la relevancia de la información proporcionada. De ser necesario se harán publicaciones expresas sobre el contenido de este artículo en medios masivos de comunicación.

Este beneficio no se aplicará si en el transcurso de las investigaciones se determina que el denunciante y/o testigo ha tenido algún grado de participación en el acto de corrupción que lo haya beneficiado directamente o si este hecho no haya sido declarado inicialmente.

Cuando la información a que se refiere este artículo sea proporcionada por un servidor público, su colaboración en la identificación o acreditación de las conductas de actos de corrupción serán objetos de un reconocimiento de carácter no económico.

CAPITULO III

PROTECCIÓN A DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN

Artículo 16.- Protección de Denunciantes. El denunciante de actos de corrupción tiene derecho a que se garantice su seguridad, su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones



00000052

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

laborales, aún y cuando estas fueren amenazadas como consecuencia de una denuncia.

Las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos de quienes en calidad de empleados públicos o particulares denuncien actos de corrupción y, en caso que se requiera, conceder las medidas de protección adicionales señaladas en esta ley.

Esta protección no condiciona la posible participación de los denunciantes durante el proceso de investigación del acto de corrupción en calidad de testigo.

Artículo 17. Garantías y medidas de protección básicas para el denunciante de actos de corrupción. Todos los denunciantes de actos de corrupción, por el mismo hecho de serlo, contarán con las siguientes medidas básicas de protección, no requiriendo de ningún pronunciamiento motivado de la

Autoridad Competente:

1. Asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia, otorgada por la figura del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos deberá promover las medidas necesarias para garantizar la seguridad física y estabilidad laboral del denunciante.
2. La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 11.

De ser el caso que el denunciante sea un funcionario público se protegerán sus condiciones laborales no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia. Esta protección será permanente y podrá mantenerse, a criterio de la autoridad otorgante, incluso con posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción a que hubiese lugar. En ningún caso, esta protección exime al funcionario público de las responsabilidades administrativas por hechos diferentes a los de la denuncia.

De ser el caso que el denunciante sea un ciudadano que no ejerce función pública, y sea sujeto de hostilidades en su centro de trabajo, recibirá asistencia legal del Procurador de los Derechos Humanos a efectos de interponer los recursos necesarios que hagan valer sus derechos conforme a las normas laborales vigentes.

Artículo 18.- Medidas adicionales para la protección de denunciantes de actos de corrupción.

Adicionalmente, y a criterio de las autoridades competentes, se podrán otorgar nuevas medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción -con carácter de excepcionalidad- siempre que se considere el peligro, vulnerabilidad real o potencial de sus derechos, a la integridad



00000053

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

personal y la de sus bienes o la variación injustificada de sus condicionales laborales.

Estas son:

Medidas de protección laboral

1. Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad
2. Traslado de centro de trabajo según sea el caso,
3. Suspensión temporal con goce de salario sin generar precedentes.
4. Otras que considere la autoridad.

Medidas de protección personal

1. Protección policial
2. Cambio de residencia u ocultación del paradero del denunciante.

Excepcionalmente esta medida tendrá una aplicación extraterritorial.

3. Otras que considere la autoridad.

La aplicación de las medidas de protección adicionales requiere de la emisión de una resolución motivada por la autoridad competente.

Artículo 19.- Aplicación de medidas de protección de testigos. Adicionalmente, y de ser el caso, de forma excepcional y motivada, la autoridad competente podrá otorgar a los denunciantes de actos de corrupción medidas de protección correspondientes a los testigos.

Estas medidas serán aplicables siempre y cuando el denunciante se comprometa a cumplir con todas las obligaciones y exigencias impuestas a los testigos de actos de corrupción y suscriba la correspondiente Acta de Compromiso, en virtud de lo previsto en el artículo 31 de esta ley.

CAPITULO IV

PROTECCIÓN A TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN

Artículo 20.- Protección de Testigos. El acceso a la protección de testigos de actos de corrupción es un derecho que garantiza el ejercicio pleno de la integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de trabajo, que eventualmente podrían ser amenazadas como consecuencia de su participación en los procedimientos propios de la investigación de un acto de corrupción.



00000054

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

Para tal efecto, las autoridades competentes se obligarán a prestar máximas garantías a los testigos de actos de corrupción a fin de garantizar la protección de sus derechos y la adecuada realización de las actuaciones procesales de investigación del caso.

Artículo 21.- Medidas básicas para la protección de testigos de actos de corrupción. Todos los testigos de actos de corrupción, por el mismo hecho de serlo, contarán con las siguientes medidas básicas de protección, no requiriendo de ningún pronunciamiento motivado de la Autoridad Competente:

1. Asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia, otorgada por la figura del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos deberá promover las medidas necesarias para garantizar la seguridad física y estabilidad laboral del denunciante.
2. La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 11.

De ser el caso que el testigo sea un funcionario público se protegerán sus condiciones laborales no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de su participación en el proceso de investigación. Esta protección será permanente y podrá mantenerse, a criterio de la autoridad otorgante, incluso con posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción a que hubiese lugar. En ningún caso, esta protección exime al funcionario público de las responsabilidades administrativas por hechos diferentes a los de la denuncia.

De ser el caso que el denunciante sea un ciudadano que no ejerce función pública, y sea sujeto de hostilidades en su centro de trabajo, recibirá asistencia legal del Procurador de los Derechos Humanos a efectos de interponer los recursos necesarios que hagan valer sus derechos conforme a las normas laborales vigentes.

Artículo 22.- Medidas adicionales para la protección de testigos de actos de corrupción. Adicionalmente, y a criterio de las autoridades competentes, se podrán otorgar nuevas medidas de protección a los testigos de actos de corrupción -con carácter de excepcionalidad- siempre que se considere la vulnerabilidad, real o potencial de sus derechos, su integridad personal y la de sus bienes o de sus condiciones laborales.

Estas son las siguientes:

Medidas de protección laboral

1. Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad
2. Traslado de centro de trabajo según sea el caso,



00000055

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

3. Suspensión temporal con goce de salario, sin generar precedentes.

4. Otras que considere la autoridad

Medidas de protección personal

1. La reserva de su identidad en las diligencias que intervenga imposibilitando que en las actas se haga mención expresa a sus nombres, apellidos, domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que ponga en evidencia al testigo.

2. Intervención en las diligencias utilizando métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva del testigo (distorsionadores de voz, rostros cubiertos, entre otros). La aplicación de esta medida procurará no alterar las garantías del debido proceso durante el periodo de investigación del acto de corrupción.

3. Utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la participación física del testigo en las diligencias (videoconferencias, teleconferencias, entre otros).

4. Cambio de identidad a través de la emisión de nueva documentación

5. Protección policial que puede incluir la designación de personal policial en forma permanente en su domicilio y en sus desplazamientos cotidianos.

6. Cambio de residencia u ocultación del paradero del testigo.
Excepcionalmente esta medida tendrá una aplicación extraterritorial.

7. Asistencia monetaria para su subsistencia en caso quede desamparado con motivo de su denuncia.

8. Señalamiento de sede diferente a su domicilio para las notificaciones propias del proceso de investigación.

9. En el caso de testigos que se encuentren en prisión, medidas especiales de protección, tales como su separación del resto de la población carcelaria o su reclusión en áreas o cárceles especiales.

10. Otras que considere la autoridad.

La aplicación de las medidas de protección adicionales requiere de la emisión de una resolución motivada por la autoridad competente.

CAPITULO V

SOLICITUD Y CONCESIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 23.- Solicitud de Medidas de Protección por parte de los denunciantes y testigos de actos de corrupción. La solicitud de medidas de



000000056

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

protección es la acción por la cual un denunciante y/o un testigo de un acto de corrupción requieren el otorgamiento de medidas de protección por considerar vulnerados o en peligro de vulneración su integridad, la de sus bienes o la alteración indebida de sus condiciones laborales.

Artículo 24.- Oportunidad para la presentación de solicitudes de protección.

Las solicitudes de protección pueden presentarse en forma adjunta a la denuncia del acto de corrupción o en fecha posterior.

Su presentación no exige ningún tipo de formalidad, pudiendo ser presentadas en forma oral, por correo electrónico, por teléfono y/o por escrito. Sin perjuicio de ello, podrán diseñarse formularios específicos atendiendo las especificidades de la presente ley.

La no presentación de la solicitud o formulario de protección, no justifica el no darle trámite a una denuncia presentada. De no ser presentada la solicitud de protección, la autoridad competente al evaluar las condiciones de peligro podrá otorgar las medidas adicionales de protección contenidas en los artículos 18 y 22 de la presente ley previa exhortación al denunciante y/o testigo de actos de corrupción sobre las circunstancias que lo motivan, y previa aceptación por su parte de los compromisos que esto conlleva.

Artículo 25.- Admisibilidad de la solicitud de medidas de protección. Las solicitudes de protección serán admitidas cuando se presenten algunas de las siguientes circunstancias:

1. Que estén sustentadas en la presentación de una denuncia referida a acciones u omisiones que revelen hechos de corrupción de carácter penal y/o administrativo.
2. Que incluyan la identificación o individualización de los autores y, si fuera el caso, de quienes participen en los hechos denunciados. De no conocerse esta información debe señalarse expresamente.
3. Que los hechos denunciados no hayan sido materia de un proceso judicial o administrativo que tenga la condición de cosa juzgada o cosa decidida.
4. Que los hechos denunciados no hayan prescrito.
5. Que contengan la suscripción del compromiso del denunciante y/o testigo de colaborar con todas las diligencias al ser solicitadas por la autoridad competente.
6. Que expresamente se soliciten una o más medidas de protección.
7. Que se mencione a los beneficiarios



00000057

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

De ser necesario y, en caso se omita algún requisito en la solicitud de medidas de protección, se fijará un plazo prudente al solicitante para que subsane la información requerida.

Artículo 26.- Calificación de la solicitud de protección. Recibida la solicitud de protección las autoridades competentes deberán valorar la información recibida a efectos de determinar su relevancia y el grado de peligro o vulnerabilidad al que está sujeto el solicitante y de ser el caso disponer el otorgamiento de las medidas de protección adicional contenidas en los artículos 18 y 22 de la presente ley.

Para tal efecto las autoridades competentes dispondrán la realización de todas las diligencias pertinentes que permitan obtener certeza respecto de los hechos declarados.

De no estimarse, se declarará improcedente la solicitud de medidas de protección o improcedente en parte, y de ser necesario se comunicará al solicitante preste mayor información sobre el caso.

Artículo 27.- Evaluación de la relevancia de la información. La información que proporcione el denunciante y/o testigo - a efectos de ser beneficiario de medidas de protección - se considerará como relevante si es que permite a la autoridad administrativa y/o judicial configurar cuando menos alguno de los siguientes supuestos:

1. Evitar la continuidad, permanencia o consumación del acto de corrupción, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución.
2. Impedir o neutralizar futuras acciones de corrupción.
3. Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el acto de corrupción, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando.
4. Identificar a los autores y partícipes de un acto de corrupción, cometido o por cometerse, o a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla, menguarla o detener a uno o varios de sus miembros.
5. Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del acto de corrupción, así como indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales.
6. Entregar a las autoridades los instrumentos, efectos, ganancias o bienes delictivos producidos por los actos de corrupción.



00000058

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

7. Aportar, a criterio del funcionario competente, elementos de valor probatorio, para adelantar la investigación.

Para los efectos del presente artículo, se entiende que disminuyen sustancialmente la magnitud o consecuencias de la ejecución del acto de corrupción, cuando se logra disminuir la magnitud de los perjuicios que habrían de ocasionar los actos programados o en curso, mediante el oportuno aviso a las autoridades, o se impide por este medio la consumación de los mismos.

Artículo 28.- Evaluación de las circunstancias de peligro para el denunciante y/o testigos La evaluación de las circunstancias de peligro está sujeta a la existencia de condiciones manifiestas o potenciales de peligro para el denunciante y/ o testigo de actos de corrupción.

Son consideradas *condiciones manifiestas* de peligro todas aquellas en donde ya se hayan consumado actos contra la integridad personal de los denunciantes y/o de sus bienes, estabilidad en el trabajo y/o de su cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, descendientes o hermanos; existiendo la posibilidad de ser víctima de otros actos similares con posterioridad.

Además se considerarán *condiciones manifiestas de peligro*, los actos tentativos contra la vida e integridad y/o bienes de los denunciantes, actos de hostilidad laboral, como despido injustificado, traslado de centro de trabajo intempestivo y otros.

Son consideradas *condiciones potenciales* de peligro la existencia de hechos o circunstancias que permiten inferir posibles atentados contra la integridad personal de los denunciantes y/o de sus bienes, estabilidad en el trabajo y/o de su cónyuge o su conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos.

Artículo 29.- Elaboración y contenido de la resolución de concesión o denegatoria de medidas adicionales de protección. Culminadas las diligencias previas correspondientes, y en caso de que se consideren procedentes o que se denieguen medidas adicionales de protección a los denunciantes y/o testigos, se elaborará una resolución en la que constará:

1. Los hechos denunciados y las diligencias preliminares efectuadas.
2. Las medidas de protección concedidas o la razón de denegatoria.
3. El mandato a las entidades cuya intervención o colaboración se considere necesaria para la ejecución de las medidas de protección
4. La solicitud para la asistencia mutua de otro Estado, de ser esto necesario.



00000059

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

5. Las obligaciones a las que queda sujeta la persona protegida.
6. Las condiciones que suponen el cese de las medidas de protección.

Artículo 30. - Obligaciones de las personas sujetas a protección. Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiaria de protección están referidas a garantizar la buena marcha del proceso penal y/o administrativo relacionado al acto de corrupción y a mantener las debidas condiciones para el sostenimiento de las medidas de protección.

En consecuencia pueden:

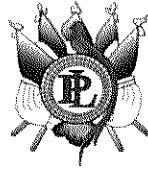
1. Cooperar en las diligencias que sean necesarias, a convocatoria de la autoridad judicial o administrativa competente.
2. Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las medidas de protección, asegurando su propia integridad y seguridad.
3. El deber de confidencialidad del denunciante o testigo, incluso cuando salga del programa, en relación con las condiciones y la manera como opera el programa;
4. Otras medidas a consideración de la autoridad competente en sede administrativa y/o del Ministerio Público.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones la autoridad, de acuerdo a la gravedad del caso, podrá imponer las sanciones de amonestación y de expulsión del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, sin perjuicio de las acciones de naturaleza civil a que hubiere lugar con la finalidad de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al Estado.

Artículo 31.- Acta de Compromiso de Cumplimiento de Obligaciones. Una vez admitidos en el Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, los denunciantes y testigos deberán suscribir un Acta de Compromiso de Cumplimiento de Obligaciones, que consiste en un documento en el que se definen de manera detallada, tanto las obligaciones y las acciones que realizará la autoridad responsable de otorgar protección, como las obligaciones y acciones que deberán realizar los denunciantes o testigos, así como las sanciones que a estos últimos les podrían ser impuestas por su incumplimiento, las cuales podrían llegar incluso a la expulsión del aludido Programa.

El acta deberá contener como mínimo:

1. La declaración del denunciante o testigo, y en su caso de las personas ligadas a él con vínculos de parentesco, de que su admisión al Programa es voluntaria, con pleno conocimiento, sin coacción y que las medidas de



00000060

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

protección a otorgar no serán entendidas como pago, compensación, o recompensa por testificar;

2. Los alcances y el carácter de la protección que se va a otorgar por parte de la autoridad, según sea prescrito en la resolución referida en el artículo 29 de la presente ley.

3. Las obligaciones del denunciante o testigo sujeto a protección y las sanciones a ser aplicadas en caso de incumplimiento, de acuerdo a lo prescrito en la resolución referida en el artículo 29 de la presente ley.

Artículo 32.- Plazo para la emisión de la resolución sobre la solicitud de medidas de protección.

El plazo para el pronunciamiento de la autoridad, otorgando o denegando las medidas de protección solicitadas, no puede ser mayor al de tres (3) días calendarios.

Artículo 33.- Otorgamiento de medidas de protección en forma cautelar. Sin perjuicio del plazo para el pronunciamiento de la autoridad y evaluando las circunstancias de peligro se podrá, inmediatamente después de la presentación de la solicitud de protección, otorgar en forma cautelar las medidas de protección, pronunciamiento que quedará sujeto a una verificación posterior y sumaria de los hechos expuestos.

Artículo 34.- Acumulación. El otorgamiento de una medida de protección no excluye la posibilidad del otorgamiento de otras pudiendo acumularse dependiendo de las circunstancias valoradas por la autoridad otorgante.

Artículo 35.- Aplicación extraterritorial. Según la motivación de la autoridad competente para conceder medidas de protección a los denunciantes y testigos de actos de corrupción, es posible que sean de aplicación en territorio extranjero conforme a las reglas prescritas en el Capítulo VIII de la presente ley.

Artículo 36.- Variación de las medidas de protección. La autoridad otorgante de las medidas de protección se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección de los denunciantes y testigos de actos de corrupción durante cualquier etapa del proceso administrativo o penal siempre y cuando exista la solicitud del beneficiario o se produzcan hechos que así lo ameriten.

Artículo 37.- Extensión de las medidas adicionales. La entidad otorgante de las medidas de protección a los denunciantes y testigos. Una vez finalizado el proceso penal y/o administrativo e impuestas las sanciones del caso



00000061

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

podrá, siempre que estime que se mantiene la circunstancia de peligro, extender la continuación de las medidas de protección.

Artículo 38.- Transferencia de fuero. Si la denuncia o la solicitud de medidas de protección ha sido presentada ante la Autoridad Competente en Sede Administrativa y corresponde ser conocida por la autoridad judicial, o como consecuencia de las investigaciones se concluye que existen indicios de la comisión de algún hecho contemplado como delito penal, o viceversa, se debe dar cuenta del mismo a la autoridad respectiva para que se inicien los procedimientos pertinentes.

Este procedimiento debe realizarse manteniendo las máximas garantías que impidan difundir de cualquier modo el acceso a la información confidencial que ponga en riesgo la integridad del denunciante y/o testigo de actos de corrupción. Para tal efecto son aplicables las sanciones descritas en el Capítulo VII de la presente ley.

CAPITULO VI

MEDIOS IMPUGNATORIOS

Artículo 39.- Medios impugnatorios. Las decisiones de las autoridades competentes para otorgar, denegar, variar o extender las solicitudes de protección en sede administrativa y/o judicial son susceptibles de la interposición de los medios de impugnación por cualquier persona o entidad que demuestre legítimo interés.

Artículo 40.- Recursos de Impugnación en sede administrativa. Los recursos impugnatorios en sede administrativa son los contenidos en el Decreto Ley número 119- 96 Ley de lo Contencioso Administrativo, Título 1, Diligencias Previas, Capítulo 11 Recursos.

Vencidos los plazos para interponer recursos administrativos o cuando se haya obtenido el pronunciamiento de la última instancia posible se considerará la resolución de otorgamiento como cosa decidida quedando firme el acto administrativo.

Los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca simultáneamente.

La resolución que agote la vía administrativa podrá ser impugnada ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo regulado por ley correspondiente.

Artículo 41.- Recursos impugnatorios en Sede Jurisdiccional. Los pronunciamientos del Ministerio Público en relación al otorgamiento, denegación, variación o extensión de medidas de protección pueden ser



00000062

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

impugnados mediante un recurso de queja dirigido al inmediato superior en un plazo máximo de tres (3) días hábiles precisando el acto u omisión que lo motiva.

Puede estar sustentado en nueva prueba o en cuestiones de puro derecho y debe resolverse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

CAPITULO VII

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

Artículo 42.- Responsabilidad por incumplimiento de funciones. El incumplimiento o inobservancia de deberes relacionados con el otorgamiento de medidas de protección a los denunciantes y/o testigos de actos de corrupción genera responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal según sea el caso. Las sanciones se aplicarán previo proceso administrativo o judicial de acuerdo a la normatividad especial sobre la materia.

Los hechos de peligro o vulnerabilidad causados por conductas imprudentes atribuibles a los beneficiarios de medidas de protección no son imputables a los funcionarios públicos y no generan ningún tipo de responsabilidad para éstos o para el Estado.

Artículo 43.- Deberes de los funcionarios públicos. Son considerados deberes de los funcionarios públicos, relacionados con la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, los siguientes:

1. Recibir oportuna y diligentemente las denuncias, solicitudes de protección, o recursos impugnatorios.
2. Entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.
3. Resolver motivadamente los asuntos sometidos a su competencia.
4. Comunicar dentro del término legal la causal de abstención de la investigación en la cual se encontraría el expediente en caso de manifiesta incompatibilidad
5. Cumplir oportuna y diligentemente los mandatos de sus superiores.
6. Ejercer sus funciones en cumplimiento estricto de la ley.



00000063

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

7. No difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial que ponga en riesgo la integridad del denunciante y/o testigo.

El incumplimiento de estos deberes o la negligencia en las acciones prescritas, genera responsabilidad que acarrea sanción administrativa de acuerdo al o previsto en esta ley.

Artículo 44.- Sanciones administrativas. Las sanciones a aplicar por vía administrativa, se clasifican en leves y graves, y son:

Sanciones leves

1. Amonestación.
2. Suspensión.
3. Multa aplicable hasta por 1 O salarios mínimos. Sanciones graves

1. Suspensión laboral sin goce de sueldo hasta por un máximo de 30 días.
2. Destitución o despido.
3. Inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por un máximo de 5 años.

Artículo 45.- Criterios para la aplicación de sanciones. La aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración los siguientes criterios:

1. El perjuicio ocasionado al denunciante y/o testigo.
2. Afectación a los procedimientos.
3. Naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor.
4. La reincidencia en el acto.
5. La intencionalidad con la que se haya actuado.

Artículo 46.- Responsabilidad civil por el incumplimiento de medidas de protección a los denunciantes y testigos Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, la comisión de actos que determinen incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios responsables de dar protección a los denunciantes y testigos de actos de corrupción, genera responsabilidad civil correspondiente a una indemnización de daños y perjuicios que será determinada por la autoridad judicial competente.

Artículo 47.- Responsabilidad Penal. La responsabilidad penal corresponde a la imposición de sanción penal por la comisión del delito de



000000064

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
Nacional por la Transparencia

Incumplimiento de Deberes y será determinada por el juez competente en materia penal.

Artículo 48.-Responsabilidad de los beneficiarios. El otorgamiento y mantenimiento de medidas de protección está condicionado al cumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo 30 y en el Acta de

Compromiso que se suscriba en virtud de lo prescrito en el artículo 31 de la presente ley. Su incumplimiento podrá ser sancionado con la expulsión del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, previa comprobación de los hechos violatorios de tales obligaciones, de los cuales se deben dejar constancia, por parte de la Autoridad Competente, en la resolución motivada en la que se adopte esta decisión, contra la cual procederán los recursos de impugnación correspondientes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 49.- Reglamentación. La Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, reglamentarán los aspectos organizativos y funcionales que sean necesarios, al interior de sus entidades, para dar cumplimiento adecuado al artículo 9 de la presente ley en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la vigencia de esta ley.

Artículo 50. Vigencia. El presente decreto cobrará vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EL DIA

QUINCE.

DEL MES DE DE DOS MIL